

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,
D.C., SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D. C., ocho (08) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Referencia: 110013335 009 2018 00044 00

Accionante: AGUSTÍN BERNAL SALAMANCA

Accionado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONCILIACIÓN JUDICIAL**

I. ANTECEDENTES

Revisado el expediente, observa el despacho que el día 2 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, y en el transcurso de la misma, la apoderada de la entidad accionada formuló propuesta de conciliación, la que aportó en ocho (08) folios útiles. Acto seguido, se corrió traslado de la propuesta al apoderado de la parte actora, quien manifestó estar de acuerdo con lo formulado (fl. 66). En virtud de lo anterior, el Despacho suspendió la audiencia e indicó que la decisión de aprobación o no del acuerdo conciliatorio se realizaría mediante auto.

Así las cosas, el despacho entra a decidir lo pertinente, teniendo en cuenta que el señor Agustín Bernal Salamanca, actuando por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda con el fin de obtener la nulidad del oficio 278683 del 7 de noviembre de 2017 y, a título de restablecimiento del derecho, el reajuste de su asignación de retiro, de conformidad con el IPC certificado por el DANE para el año 1997.

1.1. Del acuerdo conciliatorio.

La apoderada de la entidad accionada en el transcurso de la Audiencia Inicial aportó copia de la certificación expedida por el Comité de Conciliación de la entidad, visible a folio 58 del expediente, en la cual se lee:

<<El comité de conciliación y defensa judicial mediante Acta 19 del 28 de marzo de 2019 consideró:

En el caso del señor AG (r) AGUSTÍN BERNAL SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía 17.105.573, goza de su asignación mensual de retiro desde el 01 de marzo de 1979 y se le reajustará su asignación mensual de retiro, a partir del 01 de enero de 1997, en el año que estuvo por debajo del IPC, para el grado de Agente, es decir, **1997**.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a través de la Resolución 4566 del 25 de julio de 2012, se dio cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, radicado 2008-00568 donde se ordena el reajuste de la asignación conforme al IPC en los años 1999 y 2002.

En cuanto a la prescripción cuatrienal contenida en el Decreto 1213 de 1990 se la pagará a partir del 01 de noviembre de 2013 en razón a la solicitud de reajuste de I.P.C., radicada el 1 de noviembre de 2017. Se reconoce la totalidad del capital como derecho esencial, se concilia el 75% de indexación y se pagará dentro de los 6 meses siguientes, tiempo en el cual no habrá lugar al pago de intereses, este plazo empezará a contar una vez el interesado presente solicitud de pago ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, acompañada de los documentos legales y pertinentes, incluido el auto de aprobación del presente acuerdo emitido por el juzgado respectivo. Igualmente, se reajustará la prestación en la respectiva nómina a partir del día siguiente a la fecha de la celebración de la audiencia de conciliación a la que se anexará la propuesta de liquidación.

(...)>>.

A la referida constancia de conciliación se anexó copia de la liquidación efectuada por el Grupo de Negocios Judiciales (fls. 59 - 65), en donde se exponen los valores por los que se concilian de la siguiente manera:

	VALOR AL 100%
VALOR DE CAPITAL INDEXADO	\$ 2.318.540
VALOR CAPITAL 100%	\$ 2.083.818
VALOR INDEXACIÓN	\$ 234.722
VALOR INDEXACIÓN POR EL 75%	\$ 176.042
CAPITAL MÁS 75% INDEXACIÓN	\$ 2.259.860
DESCUENTO CASUR	\$ 92.218
DESCUENTO SANIDAD	\$ 79.409
VALOR A PAGAR	\$ 2.088.233

II. CONSIDERACIONES

La conciliación judicial es un mecanismo de solución de conflictos de carácter particular y de contenido patrimonial, el cual, conforme a lo establecido en las Leyes 23 de 1991 y 640 de 2001, procede también en

asuntos que podrían ventilarse ante la jurisdicción contencioso administrativa, razón por la cual el numeral 8 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 brinda a las partes la posibilidad de conciliar sus diferencias en el desarrollo de la audiencia inicial.

En tal virtud, conforme a la normativa vigente, la conciliación es una manifestación unívoca de voluntad de las partes, en este caso judicial, porque se solicitó dentro del proceso judicial.

En materia contencioso administrativas, la ley y la jurisprudencia, han establecido los requisitos que debe tener en cuenta el juez competente, al momento de decidir sobre la aprobación del acuerdo conciliatorio, puesto a su consideración.

2.1. Conforme a lo anterior, se procede a verificar el cumplimiento de los siguientes **requisitos**:

2.1.1. Que no haya operado la caducidad del medio de control

En consideración a que lo pretendido por el demandante es el reajuste de su asignación de retiro con base en el IPC para el año 1997, esta prestación ostenta el carácter de periódica y, por tanto, el ejercicio del medio de control que procede en contra del acto administrativo que niega este reconocimiento no está sujeto al término de caducidad, puesto que conforme al numeral 1.º literal c), del artículo 164 del CPACA la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que reconocen o niegan prestaciones periódicas, puede interponerse en cualquier tiempo, independientemente de la prescripción de las mesadas no reclamadas en tiempo, aspecto sobre el cual se referirá el despacho más adelante.

2.1.2. Asunto conciliado: que verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes.

En el *sub lite*, se advierte que el apoderado de la entidad accionada allegó propuesta de conciliación en la Audiencia Inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, y el apoderado de la parte actora manifestó estar de acuerdo con dicha oferta, relacionada con el reajuste de la asignación de retiro en favor del señor Agustín Bernal Salamanca, con fundamento en el IPC para el año 1997 (más favorable).

Al respecto, el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, estipula:

“Artículo 70. La conciliación es un acto voluntario por el cual las partes en conflicto, con o sin la intervención de un tercero, llegan a un acuerdo que pone fin a la controversia y evita la continuación del proceso judicial.”

«Artículo 59. Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de su apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico del que conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, (.).»

Ahora bien, aunque en principio los derechos salariales y prestacionales no son conciliables en razón de su irrenunciabilidad, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política, la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de los acuerdos conciliatorios, siempre y cuando a través de ellos se procure el mejoramiento del derecho y no su menoscabo.

En ese orden de ideas, resulta forzoso concluir que el acuerdo conciliatorio versa sobre derechos susceptibles de ser conciliados entre las partes, tras verificar que el convenio suscrito lejos de menoscabar el derecho de la parte actora, lo mejora. Adicionalmente, el derecho a la indexación, y el pago de los intereses que emergen como consecuencia del reajuste de la asignación de retiro con fundamento en el incremento del IPC, que es finalmente el aspecto sobre el cual la parte actora está cediendo en su derecho, resulta discutible y renunciable, por tanto, puede ser objeto de transacción, pues el reajuste de la prestación como tal sí se reconoce de forma completa.

2.1.3. Representación de las partes y capacidad para conciliar

En el expediente, se encuentra acreditado que el señor Agustín Bernal Salamanca actúa a través de apoderado dentro del presente medio de control y en memorial de poder visto a folio 1, se le facultó para conciliar expresamente.

Igualmente, se extrae que CASUR constituyó apoderada (fls. 43 a 48) con facultad para conciliar, quién previa anuencia del Comité de Conciliación propuso una fórmula de arreglo, que fue aceptada de forma libre y espontánea, por la parte actora.

En ese sentido, es evidente la voluntad de las partes de acogerse a la propuesta plasmada en la certificación expedida por el Comité de Conciliación de la entidad demandada.

2.1.4. Del reajuste de la asignación de retiro con sujeción al índice de precios al consumidor.

En aras de verificar que el acuerdo sometido a aprobación judicial, se ajusta a la ley, y no es lesivo para el patrimonio público, de conformidad

con lo señalado en los artículos 25, 26 y 37 de la Ley 640 de 2001, se estima pertinente hacer una breve alusión al derecho concertado.

Precisado lo anterior procede el despacho recordar que no obstante que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de la fórmula para mantener el poder adquisitivo de las pensiones al personal de la Fuerza Pública, ello cambió con el artículo 1º de la Ley 238 de 1995 que adicionó aquel artículo 279 para incluirlos, y con el Decreto 4433 de 2004, se dispuso el incremento de las asignaciones de retiro aplicando el principio de oscilación, teniendo en cuenta la variación en las asignaciones de los oficiales y suboficiales en actividad.

Profusos han sido los pronunciamientos del Consejo de Estado en torno al tema, como la sentencia proferida con ponencia del consejero William Hernández Gómez, Expediente 73001-23-33-000-2013-00382-01 (3181-14), sentencia de 5 de abril de 2017, en la cual recordó lo expuesto en sentencia del 4 de marzo de 2010, con ponencia del doctor Luis Rafael Vergara Quintero.

En consecuencia, resulta evidente que este reajuste opera desde la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 y ratificado con el Decreto 4433 de 2004.

2.1.5. Respaldo probatorio del acuerdo

Reposa la copia de la resolución 1579 del 23 de abril de 1979, por medio de la cual la entidad demandada reconoció asignación de retiro al demandante, efectiva a partir del 1 de marzo de 1979 (medio magnético), se acreditó la presentación del escrito de petición el 1 de noviembre de 2017, por medio del cual el demandante solicitó a la entidad demandada el reajuste de su prestación de conformidad con el IPC certificado por el DANE (fls. 3 y 4), documento privado de fecha cierta, (art. 253 del CGP) y no cuestionado por la entidad que lo resolvió negativamente con oficio E-01524-201724693-CASUR-278683, (fls. 5 y 6).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el índice de precios al consumidor es un hecho notorio, el despacho presenta un cuadro comparativo donde se evidencia la diferencia del incremento de la asignación de retiro realmente efectuado conforme al principio de oscilación, y el reclamado por el demandante, en aplicación del IPC, certificado por el DANE para el grado de agente, así:

DIFERENCIA ENTRE SALARIOS FIJADOS POR OSCILACIÓN E IPC			
AÑOS	VARIACION	% IPC año ant.	DIFERENCIA
1997	18,86%	21,63%	-2,77%

Lo anterior permite concluir que el incremento de la asignación de retiro en favor del demandante, realizado con base en el principio de oscilación para el año 1997, fue inferior al IPC, siendo procedente el reajuste respecto del mentado año, y su correspondiente incidencia en las anualidades posteriores.

Entonces, bajo estos parámetros la entidad propone el pago del 100% del capital por la suma de dos millones ochenta y tres mil ochocientos dieciocho pesos m/cte (\$2.083.818) y el 75% de la indexación por valor de doscientos treinta y cuatro mil setecientos veintidós pesos m/cte (\$234.722), para un total de dos millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta pesos m/cte (\$2.259.860), sobre el cual deberán descontarse las sumas correspondientes a seguridad social, como lo señaló la entidad en su liquidación, circunstancia que arroja un gran total en favor del demandante de dos millones ochenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos (\$2.088.233).

Este reajuste implica que la mesada pensional del demandante tenga un incremento de treinta mil setecientos veintiocho pesos m/cte (\$30.728).

2.2. Sobre la prescripción del derecho

Para efectos de verificar que el acuerdo conciliatorio objeto de estudio no resulta lesivo al patrimonio público, es menester examinar que la entidad no haya concurrido el pago de obligaciones extinguidas por la prescripción cuatrienal prevista en Decreto 1213 de 1990, para las mesadas porque el derecho al reajuste es imprescriptible, es prestación periódica.

El accionante elevó petición de reajuste ante la entidad demandada el 1 de noviembre de 2017, deprecando el reajuste de su prestación, razón por la cual, la entidad no se encuentra obligada al pago de las diferencias que resulten como consecuencia del reajuste, sobre de las mesadas anteriores al 1 de noviembre de 2013, habida consideración a que frente a ellas operó el fenómeno de la prescripción cuatrienal, tal y como lo señaló la misma entidad en la liquidación que soporta la propuesta conciliatoria debidamente aceptada por el apoderado actor (fl. 59).

2.3. Conclusión

De las consideraciones expuestas, se concluye que el acuerdo conciliatorio analizado, se fundó en un objeto y causa lícita, sin vicios en el consentimiento de las partes conciliatorias, y sin que con él se desconozcan los derechos irrenunciables del empleado, se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico de la entidad.

En consecuencia, el Despacho APROBARÁ la propuesta de conciliación entre el apoderado del señor AGUSTÍN BERNAL SALAMANCA con facultad expresa para conciliar y la apoderada de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL.

Bajo las anteriores consideraciones, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D.C,

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes del proceso, a través de sus apoderados, señor **AGUSTÍN BERNAL SALAMANCA** y **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**, por valor de dos millones ochenta y ocho mil doscientos treinta y tres pesos (\$2.088.233), conforme a las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Esta providencia presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada material.

TERCERO: En firme esta providencia expídase copia auténtica de la misma, dejando en la Secretaría las constancias de ley (numeral 2, del artículo 114 del C.G.P.), devuélvase a la parte demandante el remanente de los gastos del proceso, si los hubiere, y archívese el expediente dejando las constancias a que haya lugar.

FINQUELVA.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

GUILLERMO POVEDA PERDOMO

Juez

JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SECCIÓN SEGUNDA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha nueve (09) de abril de dos mil diecinueve (2019) a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

Miryam Yanneth Martínez Cortes
Secretaría

GUILLERMO POVEDA PERDOMO

Juez

